

## **AMPARO EN REVISIÓN 814/2023**

**QUEJOSO: ABRAHAM MOISES CANO  
DÍAZ**

**RECURRENTE: JEFA DEL  
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN,  
VINCULACIÓN E INTERCAMBIO  
ADSCRITA A LA COORDINACIÓN DEL  
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA Y  
EL DIRECTOR, AMBOS DE LA  
FACULTAD DE ESTUDIOS  
SUPERIORES ACATLÁN Y EL RECTOR,  
TODOS DE LA UNIVERSIDAD  
NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO**

**PONENTE: MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK**

**SECRETARIO: ALFREDO URUCHURTU SOBERÓN  
SECRETARIA AUXILIAR: ADDA ROSA HOYOS BRITO**

### **ÍNDICE TEMÁTICO**

**Hechos:** Una persona promovió juicio de amparo indirecto reclamando la omisión de garantizar el derecho a la gratuidad en la educación en razón de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) le cobró la inscripción al diplomado “El juicio de amparo en el sistema penal acusatorio” como opción de titulación de la licenciatura de derecho.

El Juez de Distrito que conoció del asunto, determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que el Centro de Educación Continua de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (FES) de la UNAM garantizara el derecho a la gratuidad en la educación superior, evitando el cobro por la impartición del diplomado mencionado, como opción para la titulación de la licenciatura en derecho y, en consecuencia, se cubrieran o tuvieran por cubiertos los pagos necesario para el quejoso.

Inconformes, la Jefa del Departamento de promoción, vinculación, e intercambio adscrita a la coordinación del Centro de Educación Continua, y el Director ambos de la FES Acatlán de la UNAM, así como el Rector de la UNAM, promovieron sendos recursos de revisión.

Posteriormente, el quejoso interpuso revisión adhesiva y solicitó a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que ejerciera su facultad de atracción para conocer del presente asunto y en sesión de privada de seis de septiembre de dos mil veintitrés la Segunda Sala decidió atraer el asunto.

El amparo en revisión fue turnado a la Ministra Esquivel Mossa; sin embargo el quejoso planteó impedimento para que dicha ministra no conociera del caso. Después de tramitado el impedimento, la Segunda Sala resolvió que éste era fundado, por lo que el Ministro Presidente de la Segunda Sala retornó el asunto a la Ministra Lenia Batres Guadarrama.

AMPARO EN REVISIÓN 814/2023

Dicha ministra presentó un proyecto en sesión de nueve de octubre de dos mil veinticuatro; sin embargo la mayoría de los ministros integrantes de la Segunda Sala decidieron desecharlo, por lo que el asunto fue retornado al Ministro Javier Laynez Potisek.

	Apartado	Criterio y decisión	Págs.
I.	COMPETENCIA	La Segunda Sala es competente para conocer del presente asunto.	13-14
II.	LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD	Los recursos de revisión principales y el adhesivo fueron presentados por partes legitimadas. Los recursos de revisión principales son oportunos; sin embargo el recurso de revisión adhesiva es extemporáneo.	14-15
IV.	PROCEDENCIA	La demanda es procedente.	15-16
V.	ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA	Se desestiman las causas de improcedencia	16-17
VI.	ESTUDIO DE FONDO VI.1. Marco jurídico sobre el derecho a la gratuidad en la educación superior	Tanto en los criterios que ha emitido esta SCJN como en las propias disposiciones normativas de la materia, se concluye que la gratuidad en la educación superior se puede dar de manera progresiva	17-25
	VI.2. Aplicación al caso concreto	Son esencialmente fundados los agravios de las autoridades responsables. Los diplomados como opción de titulación no forman parte de la licenciatura y por lo tanto, el principio de gratuidad en la educación superior no les es aplicable.	25-32
VII.	DECISIÓN	PRIMERO. Se desecha el recurso de revisión adhesivo.	32

AMPARO EN REVISIÓN 814/2023

		<p><b>SEGUNDO.</b> Se revoca la sentencia recurrida.</p> <p><b>TERCERO.</b> La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso.</p>	
--	--	--	--

PROYECTO

**AMPARO EN REVISIÓN 814/2023**

**QUEJOSO: ABRAHAM MOISES CANO  
DÍAZ**

**RECURRENTE: JEFA DEL  
DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN,  
VINCULACIÓN E INTERCAMBIO  
ADSCRITA A LA COORDINACIÓN DEL  
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA  
Y EL DIRECTOR, AMBOS DE LA  
FACULTAD DE ESTUDIOS  
SUPERIORES ACATLÁN Y EL  
RECTOR, TODOS DE LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE MÉXICO**

VISTO BUENO  
SR. MINISTRO

**PONENTE: MINISTRO JAVIER LAYNEZ POTISEK**

COTEJÓ

**SECRETARIO: ALFREDO URUCHURTU SOBERÓN**

**SECRETARIA AUXILIAR: ADDA ROSA HOYOS BRITO**

Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al \*\*\*, emite la siguiente:

**SENTENCIA**

Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 814/2023, interpuesto por La Jefa del departamento de promoción, vinculación e intercambio adscrita a la coordinación del centro de educación continua y el Director, ambos de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán (en adelante FES) y del Rector, todos de la Universidad Nacional Autónoma de México (en adelante UNAM) en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 176/2023 del índice del Juzgado Decimosexto de Circuito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez.

El problema jurídico a resolver por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si se transgrede el principio de

## AMPARO EN REVISIÓN 814/2023

gratuidad en la educación superior al exigirse el cobro de un diplomado como opción de titulación de la licenciatura de Derecho en la FES Acatlán, de la UNAM.

### ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. **Demanda de amparo.** De acuerdo con las constancias que obran en autos se advierte que una persona promovió juicio de amparo señalando como acto reclamado el cobro de un diplomado como opción de titulación del Centro de Educación Continua de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM. Asimismo indicó que las autoridades responsables eran: I) el Rector de la UNAM; II) el Director de la Facultad de Estudios Superior Acatlán; y III) el Titular del Departamento de promoción, vinculación e intercambio adscrito a la coordinación del Centro de Educación Continua de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, de la UNAM.
2. **Incompetencia del Juzgado de Distrito en la Ciudad de México.** Por acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, el Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México formó el expediente correspondiente pero posteriormente, se declaró incompetente por razón de territorio y remitió los autos al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez.
3. **Radicación y admisión del amparo indirecto.** El Juzgado Décimo Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez acepto la competencia, admitió a trámite la demanda de amparo
4. **Sentencia de amparo.** Seguidos los trámites, el Juzgado dictó la sentencia correspondiente concediendo el amparo al quejoso, bajo las siguientes consideraciones:
  - A pesar de que las autoridades responsables negaron los actos reclamados, de sus propias manifestaciones se advierte la existencia de éstos pues se indica el costo del diplomado para aquellos alumnos que se encuentren en esa modalidad de titulación para la educación superior, además de que el quejoso

## AMPARO EN REVISIÓN 814/2023

exhibió el calendario del diplomado “El juicio de amparo en el sistema penal acusatorio” de donde se advierten los costos de éste.

- El artículo 3° de la Constitución Federal establece un contenido mínimo sobre el derecho a la educación que el Estado Mexicano debe garantizar con efecto inmediato. Esto es, si bien las características del derecho a la educación básica no son iguales a las aplicables a la educación superior, lo cierto es que sí se puede extender el principio de gratuidad de la educación.
- El Estado tiene el deber de promover, así como atender todos los tipos y modalidades de educación, tanto la básica como la superior, las cuales son necesarias para el desarrollo nacional, además, debe apoyar la investigación científica, tecnológica y alentará el fortalecimiento y difusión de la cultura nacional, por lo que la configuración mínima del derecho a la educación implica que la educación básica y media superior impartida por el Estado debe ser gratuita, obligatoria, universal y laica.
- Si bien la educación superior que imparta el Estado, en principio, no necesariamente debe ser gratuita, puede establecerse su gratuidad en atención al principio de progresividad y, además, debe respetar otros principios como el de acceso sobre la base de las capacidades económicas y la no discriminación en el acceso y permanencia, entre otros.
- El derecho a la educación solo constituye la base para lograr las condiciones necesarias para el ejercicio de la autonomía personal al satisfacer un parámetro mínimo, por ello, las normas constitucionales y los tratados internacionales que reconocen que el objetivo de la educación debe ser el desarrollo de las capacidades del ser humano para el fomento de los derechos humanos; además, prevén la participación en la educación escolarizada tanto del Estado como de otros actores sociales y su obligación de respetar el parámetro mínimo de este derecho.
- Por ello, el derecho humano a la educación, además de una vertiente subjetiva como derecho individual de todas las personas, tiene una dimensión social o institucional, ya que la existencia de personas educadas es una condición necesaria para el funcionamiento de una sociedad democrática, por lo que el derecho humano a la educación, tiene además, una dimensión social que lo dota de una especial relevancia al ser una condición necesaria para el funcionamiento de una sociedad democrática.
- La educación superior, se centra en la materialización de un plan de vida libremente elegido, por lo que tiene como finalidad proveer de herramientas necesarias para concretarlo, ya que está estrechamente vinculada con la obtención de determinados objetivos colectivos, como el desarrollo del conocimiento científico y tecnológico, entre otros, por lo que el Estado no puede desvincularse de tales finalidades sociales en beneficio de la sociedad al maximizarlo de manera difusa.
- El contenido del derecho a la educación superior, está enfocado en la generación y transmisión de conocimientos especializados vinculados con distintas profesiones sociales y campos del conocimiento, así como el desarrollo de habilidades necesarias para tal efecto.
- En el caso concreto, si bien es cierto la educación superior, no es obligatoria ni universal ni necesariamente gratuita, ya que el acceso a ella depende, entre otras cosas, de la libre elección individual de un plan de vida que incluya la obtención de educación superior como parte central, por tanto, la decisión de acceder a la educación superior recae exclusivamente en el individuo, quien, por regla general, ha obtenido las condiciones mínimas para ejercer la autonomía personal.

## AMPARO EN REVISIÓN 814/2023

- Sin embargo, esa educación superior está sometida al principio de no discriminación y, por ello, está vedado imponer condiciones de acceso, permanencia y conclusión discriminatorias, esto es, que establezcan diferencias de trato con base en propiedades irrelevantes para la consecución de los fines de la educación superior o sean inadecuadas, innecesarias o desproporcionadas.
- Si bien es cierto que la educación superior no es, en un primer término, gratuita, ya que es responsabilidad de los individuos la libre elección de un plan de vida que, en su caso, incluya la obtención de una educación superior, por lo que podría considerarse que deben asumir el costo de optar por cursar ese nivel educativo; también lo es que las diferencias sociales y económicas no imputables a los propios individuos, pueden impedir el acceso a un plan de vida que tenga como aspecto central el obtener educación superior.
- Toda vez que el Estado Mexicano tiene el deber constitucionalmente impuesto de promover la educación superior para lograr distintos objetivos colectivos necesarios para el desarrollo de la nación, lo que resulta compatible con la decisión de cualquier autoridad del Estado Mexicano, en este caso, lo cual también debe adoptar la UNAM, a través de su FES Acatlán y su Centro de Educación Continua.

Instituciones que deben extender la gratuidad también a la educación superior, porque de acuerdo con el principio de progresividad previsto en el artículo 1 constitucional y en los diversos instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte, todas sus autoridades están obligadas, en el caso, a procurar gradualmente la gratuidad de la educación superior, de conformidad con el contenido del derecho humano a la educación.

- El Estado Mexicano tiene la obligación inmediata de asegurar un nivel esencial en el goce del derecho a la educación, en concreto, garantizar el acceso gratuito, universal y obligatorio a la educación básica y media superior y otras de cumplimiento progresivo, consistentes en lograr el ejercicio pleno del derecho hasta el máximo de los recursos disponibles, lo que implica, entre otras cosas, extender la gratuidad a la educación superior.
- Por otra parte, las universidades públicas como organismos del Estado, no son un fin en sí mismas, sino que constituyen una de las garantías institucionales del derecho humano a la educación superior y, en este sentido, tienen un carácter instrumental dependiente del cumplimiento de sus objetivos constitucionales como lo son educar, investigar y difundir la cultura.
- La Primera Sala de la Suprema Corte ha sostenido que la autonomía universitaria prevista en la fracción VII del artículo 3 constitucional, consiste en la facultad de gobernarse a sí mismas, al respetar, entre otras cosas, la responsabilidad de administrar su patrimonio, con la finalidad de lograr mayor eficacia en la prestación del servicio que les está atribuido, sin que ello signifique su disgregación de la estructura estatal, ya que se ejerce en un marco de principios y reglas predeterminadas por el propio Estado, con la finalidad proteger las condiciones necesarias para la satisfacción del derecho a la educación superior.
- De ese modo, la autonomía universitaria constituye una garantía institucional del derecho a la educación superior, ya que aquella es un diseño institucional que tiene como objetivo maximizar el respeto al principio de libre enseñanza, para el desarrollo y difusión del conocimiento y, por ello, para la satisfacción del derecho a la educación superior, es decir, la autonomía con la que cuenta, es un medio para lograr un fin, que en el caso concreto, es la educación superior, por lo que se encuentra obligada constitucionalmente a maximizar ese derecho humano.

## AMPARO EN REVISIÓN 814/2023

- La Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, establece en sus artículos 1 y 2, que es una institución de servicio, descentralizada del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotada de autonomía para realizar su finalidad de impartir educación superior y que como organismo del Estado, goza de la garantía institucional de la autonomía, por lo que está dotada de las facultades de autogobierno, autonormación y libre administración de su patrimonio.  
Sin embargo, lo cierto es que esas facultades están orientadas funcionalmente a maximizar el alcance y la tutela del derecho a la educación superior, finalidad que busca proteger la autonomía universitaria, por lo que su alcance debe determinarse en función del ámbito de protección tutelado al derecho humano a la educación superior y si el alcance del derecho humano a la educación superior debe extenderse al diplomado “El juicio de amparo en el sistema penal acusatorio” como opción prevista para cumplir para acceder a la titulación, debe incluirse en la gratuidad impartida por el Estado y, por ende, el Centro de Educación Continua de la FES Acatlán, como parte de la UNAM, está obligada a respetar y maximizar el derecho a la educación de forma gratuita.
- Luego, si conforme al plan de estudios de la licenciatura de derecho impartida en dicha institución se prevé como opción de titulación la “ampliación y profundización de conocimientos alternativa II (diplomado) mediante el diplomado ya mencionado, es inconcuso que invariablemente constituye una extensión de la educación superior, ya que es una opción para cumplir con el trámite exigido y proceder al trámite de titulación.
- De ahí que, si el quejoso se encuentra en un plano de igualdad que aquellos estudiantes que optan por las opciones gratuitas, las autoridades responsables deben permitir que al quejoso le sea impartido el diplomado que fue su elección como opción de titulación en igualdad de circunstancias, es decir, sin cobro alguno, ya que como quedó expuesto, se trata de una extensión de la educación superior, para acceder al trámite de titulación de la licenciatura en derecho.
- Así, al extenderse el alcance del derecho humano a la educación superior al establecer su gratuidad, la institución debe asumir la responsabilidad de garantizar con sus propios recursos la plena eficacia de ese derecho, por lo que, en el caso, corresponde al Centro de Educación Continua de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, cubrir con cargo a sus recursos, el pago total del aludido diplomado, como forma de titulación.

### **Efectos de la concesión de amparo:**

El Centro de Educación Continua de la FES Acatlán de la UNAM, en el ámbito de sus competencias deberá:

- 1) Garantizar el derecho fundamental a la gratuidad en la educación superior, esto es, como mínimo, evitar el cobro por la impartición del diplomado “El Juicio de amparo en el sistema penal acusatorio”, como opción para la titulación de la licenciatura en derecho (educación superior).
- 2) Cubrir los pagos necesarios respecto del quejoso para ese diplomado con cargo a los recursos de las responsables en el respectivo ámbito de sus competencias o darlos por cubiertos, para garantizar la gratuidad de la educación superior del quejoso a nivel licenciatura.



## **AMPARO EN REVISIÓN 814/2023**

5. **Recursos de revisión.** Inconformes con la resolución anterior. La Jefa de Departamento de promoción, vinculación e intercambio adscrita a la Coordinación del Centro de Educación Continua y el Director, ambos de la FES Acatlán y el Rector, todos de la UNAM, interpusieron sendos recursos de revisión.

### **5.1 Agravios del recurso de revisión interpuesto por el Rector de la UNAM**

- La sentencia recurrida transgrede lo dispuesto en los artículos 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo, al tener como ciertos los actos que negó el informe justificado.
- Los efectos de la sentencia recurrida no tienen relación con la litis planteada, al señalar que las responsables deben cubrir los pagos en virtud de la concesión del amparo al quejoso, respecto de los actos que no fueron reclamados.
- Los actos reclamados no corresponden al Rector de la UNAM, debido a que éste carece de facultades para cubrir los pagos necesarios del quejoso para que curse el diplomado.
- Se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo en razón de que al no ser ciertos los actos imputados, entonces no se tiene el carácter de autoridad responsable.
- Se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, debido a que no se acreditó que el quejoso tuviera un interés jurídico para acudir al juicio de amparo, sino un interés económico, lo que no acredita la existencia de un perjuicio real a sus derechos.
- Se debe sobreseer en el juicio de amparo ya que los actos reclamados no son atribuibles al Rector de la UNAM, incluso en los conceptos de violación, no se señalan actos propios del Rector de la UNAM.
- Se viola el principio de relatividad de las sentencias pues los jueces no pueden ordenar en sus sentencias la protección de los derechos de personas que no hayan acudido al juicio de amparo, como ocurre en el caso ya que se ordena que el Centro de Educación Continua de la FES Acatlán, de la UNAM, garantice el derecho a la gratuidad en la educación superior evitando el cobro por la impartición del diplomado “El Juicio de amparo en el sistema penal acusatorio” como opción para la titulación de la licenciatura en derecho.

**5.3 Agravios de los recursos de revisión interpuestos por el Director y la Jefa del Departamento de Promoción, Vinculación e Intercambio adscrita al Centro de Educación Continua, ambos de la FES Acatlán de la UNAM.** En estos recursos, los recurrentes hacen valer idénticos agravios, por lo que se resumirán y, en su caso, estudiarán de manera conjunta.

## **AMPARO EN REVISIÓN 814/2023**

### **Primer agravio**

La sentencia carece de fundamentación, motivación, congruencia y exhaustividad ya que el Juez de Distrito solo estudió una de las causas de improcedencia que se hicieron valer, omitiendo pronunciarse sobre la relativa a que se trataban de actos consentidos ya que en la página de internet de la FES Acatlán se indicaban los requisitos de ingreso a los diplomados, incluyendo el monto por concepto de recuperación, por lo que el quejoso tuvo conocimiento de los costos en ese momento y no hasta el veinticinco de enero de dos mil veintitrés mediante correo electrónico.

### **Segundo agravio**

Se debió sobreseer en el juicio ya que el quejoso consintió los actos reclamados en razón de que: I) mediante correo electrónico de cinco de diciembre de dos mil veintidós, el quejoso solicitó información para realizar el pago inicial del diplomado; II) por correo electrónico el veinticinco de enero de dos mil veintitrés el quejoso solicitó la ficha de pago correspondiente y III) el quejoso cubrió diversos pagos del diplomado.

### **Tercer agravio**

El Juez de Distrito omitió analizar que el acto reclamado no es un acto de autoridad ya que no se han emitido determinaciones que modifiquen, restrinjan o alteren los derechos del quejoso en razón de que no existe acto unilateral emitido toda vez que no se le ha coaccionado a éste ni a ningún otro miembro de la comunidad universitaria a optar por alguna forma de titulación en particular de manera obligatoria.

Suponiendo que se está en presencia de un acto de autoridad, éste no afecta el interés jurídico del quejoso porque son diversas las maneras en las que los egresados pueden obtener su título y ninguna tiene como condición el cobro, todo lo contrario, como es bien sabido la UNAM es una institución educativa que desde su fundación destaca por su compromiso con la sociedad ya que su propósito primordial es estar al servicio del país y de la humanidad, formando profesionistas útiles a la sociedad, organizando y realizando investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, extendiendo con la mayor amplitud posible, los beneficios de la educación y la cultura en la que no se cobra el acceso a la educación superior, incluso antes de que el Estado Mexicano contrajera este compromiso en el ámbito internacional.

Sin embargo, dado que los diplomados no forman parte de la educación superior por tratarse de educación continua ya que son cursos con valor extracurricular cuyo fin, a diferencia de la educación básica o la superior, es la actualización de conocimientos y al no ser parte de la formación integral de los alumnos de la FES Acatlán de la UNAM, únicamente permite a los egresados, comunidad externa y cualquier interesado, actualizarse en los temas que sean de su agrado pero de ninguna manera forma profesionista. Razón por la cual no puede ser comprendido como parte de la educación superior, y en consecuencia, su impartición se cubre por una cuota de recuperación la cual varía de acuerdo a la Comunidad a la que se pertenezca.

## **AMPARO EN REVISIÓN 814/2023**

Así, optar por un diplomado es un acto unilateral que solo le concierne al interesado y acatar los requisitos y compromisos que de este se desprenden incluyendo el cubrir una cuota, de ninguna manera puede comprenderse como una condicionante para la obtención de un título universitario.

### **Cuarto agravio**

Suponiendo sin conceder que la UNAM tuviera la obligación de garantizar el derecho a la educación superior (reiterando que el diplomado no es parte de ésta) y atendiendo al contenido integral de las diversas disposiciones en torno al artículo 3° de la Constitución Federal, con el propósito de extender la gratuidad a la educación superior, es el Constituyente quien debe fijar plazos razonables y graduados para ejecutar esa finalidad.

Así, se determinó que la gratuidad en la educación superior será de forma gradual a través de acciones legislativas y ejecutivas (sin referir a las jurisdiccionales), existiendo la obligación de las autoridades referidas de crear un fondo federal especial que asegure a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar ese derecho, por lo que es evidente que la materialización del derecho referido, depende de la asignación de recursos por parte de las autoridades, por tanto el cumplimiento al derecho citado es gradual ya que depende de los recursos asignados, conforme al artículo 3° de la Constitución Federal y a la Ley General de Educación.

En este sentido, para garantizar este tipo de derechos deben programarse políticas públicas en el presupuesto de egresos de la federación que, de manera expresa contemplen la gratuidad del derecho a la educación y permitan gradualmente alcanzar un grado de satisfacción de ese derecho humano. Así, es incorrecto lo resuelto por el Juez de Distrito ya que no aplica las normas de la materia y no contempla los rubros aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, es decir, en éste ninguno de los rubros destinados a la educación superior, contempla un monto destinado para cubrir gastos relativos a la gratuidad de los diplomados.

### **Quinto agravio**

La UNAM tiene autonomía presupuestaria conferida desde la Constitución Federal, la cual también la dota de plena capacidad jurídica para organizarse como lo estime mejor, dentro de los lineamientos generales señalados por la Ley Orgánica de la UNAM. Sin embargo, si bien dichas normas junto con la Ley General de Educación que establecen el alcance y contenido del derecho a la educación, el Presupuesto de Egresos de la Federación es la norma que permite materializar ese derecho ya que destaca la capacidad económica del Estado, por lo que no es válido separar la parte que contiene el plan de gastos, del texto legal que lo aprueba, siendo tampoco dable limitar la facultad legislativa del órgano que lo emite.

Ya que la Constitución Federal y sus leyes secundarias facultan a la UNAM para realizar sus fines de educar, investigar y difundir la cultura, respetar la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de ideas, así como determinar sus planes y programas dentro de los cuales no se incluye al diplomado. Y concluyendo que el diplomado no es una obligación para titulación ya que no forma parte de la educación superior, sino que es una modalidad de titulación optativa y

## **AMPARO EN REVISIÓN 814/2023**

no impositiva, es que se colige que el Juez al no estudiar las normas secundarias relacionadas con el derecho a la educación, inadvirtió que no hay violaciones a derechos humanos del quejoso.

Por otra parte, se debe precisar que el quejoso ya no es estudiante de la FES Acatlán, sino que es egresado de ésta, pues ya ha cumplido con todos sus créditos como alumno de la licenciatura de Derecho y durante toda su estancia como tal fueron respetados sus derechos, incluyendo el derecho a la educación gratuita.

### **Sexto agravio**

Las cuotas de los diplomados dependen del tipo de comunidad al que se pertenezca. En el caso, el quejoso pertenece a la comunidad de egresados pues ya no tiene estudios de educación superior vigentes y comprobables dentro de la UNAM ya que concluyó sus estudios de licenciatura. Por tanto, no deben confundirse los derechos y obligaciones que tienen un alumno a las que tiene un egresado como lo hace la sentencia, pues por una parte afirma que es egresado y, por otra, que le constituye un derecho como estudiante.

### **Séptimo agravio**

La sentencia es incongruente ya que en unos párrafos se señala que la educación superior no es obligatoria, ni tiene las mismas características del derecho a la educación básica, así como que no es obligatoriamente gratuita; sin embargo, se concede el amparo al quejoso para el efecto de garantizar su derecho a la educación superior gratuita.

Además, la Constitución Federal señala que es obligación del Estado impartir educación preescolar, primaria, secundaria y hasta media superior, misma que deberá ser además de obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, por lo que un diplomado no forma parte de ellas ni de una educación integral como si lo es la educación superior y tampoco es una extensión de la licenciatura.

Es decir, si bien la obligatoriedad de la educación superior es progresiva, el Juez de Distrito orienta el texto de la Constitución Federal en el sentido de que la gratuidad debe ser hasta el nivel de la licenciatura pero además extiende los alcances de la gratuidad hasta el diplomado, el cual no forma parte de la educación superior, sino que es un programa organizado en módulos que agrupan contenidos de una o varias disciplinas, que permiten profundizar en temas específicos y actualizar conocimientos, pero que de ninguna manera tiene como objetivo otorgar un título que permita al participante desarrollarse como profesional en determinado campo.

Por otra parte, habría que considerar que el número total de egresados supera la mitad de la población de alumnos de licenciatura del periodo 2021-2022, que es de un total de doscientos veintinueve mil doscientos sesenta y ocho alumnos, por lo tanto el presupuesto destinado para la UNAM estaría superado por el supuesto normativo creado por el Juez de Distrito, esto es, la gratuidad de los diplomados para los egresados, ya que la concesión del amparo, genera un precedente que terminaría provocando que los alumnos y egresados ya no cubran la cuota de los diplomados, obligando así a la Universidad a quitar esa forma de titulación y provocando de ese modo que el presupuesto destinado para garantizar el derecho

## AMPARO EN REVISIÓN 814/2023

a la educación de los alumnos que actualmente forman parte de la Universidad sea superado por atender el derecho a un diplomado de los egresados.

Incluso se debe señalar que siempre se ha impulsado a los egresados a continuar con su formación profesional, de modo que aquellos estudiantes que se encuentren en una situación desfavorable están en su derecho de solicitar un apoyo económico como lo son las diversas becas que ofrece la UNAM.

En el caso, resulta incongruente que el quejoso no haya solicitado una beca de titulación, máxime que como él manifiesta, durante la mayoría del tiempo como estudiante estuvo becado.

### Octavo agravio

Es importante precisar que el quejoso comenzó sus estudios de licenciatura y hasta el día que los concluyó, en su carácter de alumno recibió de manera gratuita educación superior. En relación a la titulación, de todas las modalidades que existen, que en igualdad de condiciones y oportunidades puede elegir el quejoso, solo una está sujeta al pago de una cuota, siendo el diplomado, por lo que es inconcuso que se está garantizando el derecho a la gratuidad, además de que se reitera, el diplomado no forma parte de la educación superior y no es condicionante para la obtención de un título universitario, ni tampoco por el hecho de cursar un diplomado se garantiza que el participante será licenciado, maestro o doctor.

Contrario a lo señalado por el Juez de Distrito, la FES Acatlán no implementa medida regresiva alguna pues previo a las reformas constitucionales de junio de dos mil once que dieron lugar al principio de progresividad, dicha institución ya hacía extensivo el derecho a la educación superior, pues los alumnos que lo desearan podrían aportar una cuota voluntaria desde veinte centavos y si se optaba por no cubrirla, no se impedía la inscripción ni gozar de los derechos que como alumnos tiene la comunidad estudiantil; sin embargo, los diplomados son un tipo de educación que no está contemplada como educación superior, esto es, licenciatura, maestría y doctorado.

El cobro del diplomado no es discriminatorio pues si el quejoso no contaba con los ingresos para cubrirlo, las autoridades administrativas lo hubieran apoyado. Sin embargo, sin haberse demostrado si el quejoso pertenece a un grupo considerado vulnerable o que no cuenta con la solvencia económica, el Juez de Distrito, le otorga un derecho del que no goza ningún estudiante ni egresado, en este sentido, la discriminación a la que alude el juzgador, la propicia él mismo.

Además, la UNAM se distingue por su propósito primordial de estar al servicio del país y de la humanidad, formando profesionistas útiles a la sociedad, apoyando para ello, de manera integral a sus alumnos extendiendo con la mayor amplitud posible, los beneficios de la educación y la cultura, impulsando a los alumnos a continuar con su formación profesional, de modo que con el propósito de erradicar las brechas de la desigualdad, la UNAM y la FES Acatlán, brinda un apoyo a la comunidad mediante diversas becas.

No hay discriminación alguna al señalar una cuota para cursar el diplomado ya que las opciones de titulación son estructuradas de acuerdo a los intereses de cada egresado, además de no comprenderse dentro de las categorías previstas en el

## **AMPARO EN REVISIÓN 814/2023**

artículo 1° de la Constitución Federal. Es decir, las opciones de titulación hacen distinciones respecto de los requisitos y posibilidad que mejor acomode a los alumnos, mas no son discriminatorias ya que las opciones son elegidas por cada aspirante acorde a sus intereses y cada opción tiene requisitos diversos.

### **Noveno agravio**

No se trata de un acto de autoridad ya que en ninguna circunstancia se condiciona el acceso a la titulación bajo la modalidad de diplomados. Esto pues el quejoso de manera voluntaria, unilateral y libre de vicios en su consentimiento solicitó el registro de la opción de titulación en la modalidad “Ampliación y profundización de conocimientos en su alternativa II Diplomado El juicio de amparo en el sistema penal acusatorio”, por lo que esa manifestación no puede configurar un acto de un tercero, es decir, no existió coacción ni nadie le negó el acceso al diplomado.

En atención a los derechos y libertades de los alumnos y egresados, como lo son el libre desarrollo de la personalidad, igualdad y no discriminación, entre otros, son ellos mismos quienes de manera unilateral y voluntaria deciden cuál será la modalidad que más convenga a sus intereses optar, teniendo para ello, pleno conocimiento de lo que cada una de éstas implica.

Si bien la Constitución Federal establece que la gratuidad de la educación superior se estableció a reserva de la Ley General de Educación Superior de manera gradual y que dicha gratuidad únicamente se refiere al cobro de conceptos de inscripción, reinscripción y cuotas escolares ordinarias en los programas educativos de técnico superior universitario, licenciatura y posgrado, sin que en la especie se contemplen los diplomados ya que son un tipo de educación distinta la cual no pertenece a un nivel superior.

El Juez de Distrito señaló que se violaban diversos instrumentos internacionales; sin embargo debió interpretar el artículo 3° constitucional a la luz de esos tratados pero también de las normas específicas de la materia a efecto de definir qué se entiende por educación superior y no caer en el error de que el diplomado lo es, cuando si fuera así se expediría un título o grado universitario por cursarlo y no solo por la UNAM sino por cualquier Institución que decida impartir un diplomado.

Además, si bien se fija una aportación (que no es lo mismo a un cobro) a la comunidad externa, comunidad de egresados y comunidad UNAM para el diplomado, lo cierto es que nunca se acreditó que ésta fuera obligatoria ya que si bien existe un calendario para la exhibición de las aportaciones, también lo es que no aparece ninguna consecuencia en caso de que no exista la aportación. Es decir, no se demostró qué pasaría si no se realizaba la aportación ni que de no hacerla, no tendría acceso a esa opción de titulación.

### **Décimo agravio**

Es incorrecto que el Juez de Distrito supliera la deficiencia de la queja en favor del quejoso sin motivo alguno ya que ni siquiera señala cuál fracción del artículo 79, de la Ley de Amparo era aplicable al caso, sino que se limitó a citar una tesis por analogía, lo que es inaplicable toda vez que en materia administrativa, como es el caso, es de estricto derecho que no puede suplirse la deficiencia de la queja, más

## AMPARO EN REVISIÓN 814/2023

allá que la tesis invocada es para materia civil, concretamente para un caso de emplazamiento y por violaciones al procedimiento que no se hicieron valer, lo que en el caso es inaplicable pues no existe ninguna violación a la ley que haya dejado sin defensa al quejoso.

Si el Juez consideraba que el quejoso omitió formular conceptos de violación, lo procedente era que lo requiriera para aclarar su demanda y si no cumplía con la prevención, no podía subsanarse esa deficiencia. No obstante, el Juez de Distrito cambia el contexto del acto reclamado ya que el quejoso reclama “el cobro como condición para el acceso a la titulación en cualquier modalidad, entre otros, los diplomados como opción de titulación del Centro de Educación Continua de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y lo que hace el Juez de Distrito es referir la omisión en la gratuidad de la educación, en forma inexacta, cuando ese no fue el acto reclamado.

6. **Revisión adhesiva.** Posteriormente, el quejoso interpuso revisión adhesiva y en el mismo escrito solicitó a este Alto Tribunal que ejerciera su facultad de atracción para conocer del asunto.
7. **Solicitud de ejercicio de la facultad de atracción.** Seguidos los trámites, en sesión privada de seis de septiembre de dos mil veintitrés la Segunda Sala determinó ejercer su facultad de atracción para conocer del presente asunto y de la revisión incidental, por lo que fueron solicitados los autos correspondientes.
8. **Trámite ante esta Suprema Corte.** Por acuerdo de nueve de octubre de dos mil veintitrés la Ministra Presidenta admitió a trámite el asunto, lo registró y ordenó turnarlo a la ministra Yasmín Esquivel Mossa por lo que se remitieron los autos a la Segunda Sala.
9. **Avocamiento.** Esta Segunda Sala se avocó al conocimiento del asunto mediante acuerdo de catorce de noviembre de dos mil veintitrés y ordenó remitir los autos a la ministra ponente para la elaboración del proyecto de resolución respectiva.
10. **Impedimento 18/2023.** Posteriormente, el quejoso solicitó que la ministra Yasmín Esquivel Mossa se declarara se excusara para conocer y resolver el presente asunto. Seguidos los trámites, mediante sentencia de seis de marzo

## AMPARO EN REVISIÓN 814/2023

de dos mil veinticuatro, la Segunda Sala determinó calificar de legal el impedimento planteado.

11. **Retorno a la Ministra Lenia Batres Guadarrama.** Conforme a lo anterior, por acuerdo de cinco de abril de dos mil veinticuatro, el Ministro Presidente de la Segunda Sala ordenó retornar el asunto a la Ministra Lenia Batres Guadarrama.
12. **Retorno al Ministro Javier Laynez Potisek.** En sesión de nueve de octubre de dos mil veinticuatro, la mayoría de los Ministros integrantes de la Segunda Sala desecharon la propuesta de proyecto presentada por la Ministra ponente, por lo que mediante acuerdo de diez de octubre del mismo año, el Presidente de la Segunda Sala determinó retornar el asunto al Ministro Javier Laynez Potisek.
13. **Publicación del proyecto.** De conformidad con los artículo 73, párrafo segundo y 184, párrafo primero de la Ley de Amparo el proyecto se hizo público en los plazos establecidos.

### I.COMPETENCIA

14. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo en revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal<sup>1</sup>; 81, fracción I, inciso e) y 83 de la Ley de Amparo<sup>2</sup>; y 21, fracción III, de la Ley

---

<sup>1</sup> Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

[...]

VIII. Contra las sentencias que pronuncien en amparo las Juezas y los Jueces de Distrito o los Tribunales Colegiados de Apelación procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia:  
a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales por estimarlas directamente violatorias de esta Constitución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.

<sup>2</sup> Artículo 81. Procede el recurso de revisión:

I. En amparo indirecto, en contra de las resoluciones siguientes:

(...)

e) Las sentencias dictadas en la audiencia constitucional; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la propia audiencia. (...)



## AMPARO EN REVISIÓN 814/2023

Orgánica del Poder Judicial de la Federación<sup>3</sup>; así como los puntos Primero y Tercero del Acuerdo General 1/2023 emitido por el Pleno de esta Suprema Corte<sup>4</sup>. Además de tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, competencia de esta Segunda Sala.

### II. LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD

15. Esta Segunda Sala considera que las autoridades responsables cuentan con legitimación necesaria para interponer los recursos de revisión ya que tal carácter les fue reconocido en el juicio de amparo indirecto 176/2023 del índice del Juzgado Decimosexto de Circuito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez.
16. En cuanto al recurso de revisión interpuesto por el Rector de la UNAM, se considera que también fue presentado por parte legítima ya que fue firmado por Víctor Pablo Juárez Navarrete, en su calidad de delegado, conforme al artículo 9 de la Ley de Amparo, personalidad que también le fue reconocida en el juicio de origen.
17. Por su parte, el quejoso está legitimado para interponer recurso de revisión adhesiva conforme al artículo 6 de la Ley de Amparo.

---

Artículo 83. Es competente la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del recurso de revisión contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional, cuando habiéndose impugnado normas generales por estimarlas inconstitucionales, o cuando en la sentencia se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución y subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.

<sup>3</sup> Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas

(...)

III. Del recurso de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los juzgados de distrito o los tribunales colegiados de apelación, cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales por estimarlas directamente violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad;

(...)

<sup>4</sup> **PRIMERO.** Las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercerán la competencia que les otorga el artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la manera siguiente:

(...)

La Segunda Sala conocerá de las materias administrativa y del trabajo.

**TERCERO.** Las Salas resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el Punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitidos a los Plenos Regionales o a los Tribunales Colegiados de Circuito.

## AMPARO EN REVISIÓN 814/2023

18. En cuanto a la oportunidad, los tres recursos de revisión principales fueron notificados a las autoridades responsables el veintisiete de abril de dos mil veintitrés surtiendo efectos el mismo día. Así, el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo transcurrió del veintiocho de abril al doce de mayo de dos mil veintitrés, descontándose los días veintinueve y treinta de abril, seis y siete de mayo por haber sido sábados y domingos e inhábiles, así como el uno y cinco de mayo por haber sido inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por lo que, si todos los recursos de revisión principales fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de México con residencia en Naucalpan, el doce de mayo de dos mil veintitrés, es inconcuso que son oportunos.
19. En cuanto al recurso de revisión adhesivo, debe decirse que el Tribunal Colegiado de Circuito admitió a trámite los recursos de revisión principales mediante acuerdo de doce de junio de dos mil veintitrés notificado al quejoso al día siguiente, es decir, el martes trece de junio, surtiendo efectos al día siguiente, catorce de junio del mismo año. De ahí que el plazo de cinco días establecido por el artículo 181 de la Ley de Amparo para interponer revisión adhesiva transcurrió del jueves quince de junio al miércoles veintiuno de junio, descontándose los días diecisiete y dieciocho de junio por haber sido sábados y domingos y por tanto, inhábiles conforme al artículo 19 de la Ley de Amparo.
20. Por tanto si el recurso de revisión adhesiva fue presentado electrónicamente el veinticinco de junio de dos mil veintitrés, **es evidente que resulta extemporáneo y por tanto debe desecharse.**

### III. PROCEDENCIA

21. Esta Suprema Corte considera que el asunto reúne los requisitos necesarios de procedencia y, por tanto amerita un estudio de fondo ya que se trata de

## AMPARO EN REVISIÓN 814/2023

los recursos de revisión interpuestos en contra de una sentencia de amparo indirecto emitida por un Juzgado de Distrito.

### IV. ESTUDIO DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA

22. En parte de los agravios formulados por el Rector de UNAM, así como en el primer y segundo agravios de las otras autoridades responsables de la FES Acatlán de la UNAM, se sostiene que el Juez de Distrito omitió el estudio de diversas causas de improcedencia, entre ellas, la relativa a que se trataba de un acto consentido.
23. Al respecto, debe decirse que el juicio de amparo es improcedente cuando los actos reclamados no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en términos de la fracción I del artículo 5° de la Ley de Amparo, contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, o contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.
24. En este sentido, las autoridades recurrentes estiman que el juicio de amparo era improcedente ya que la demanda de amparo fue presentada fuera del plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo.
25. Dichos agravios son **infundados** por lo siguiente.
26. De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad que el Centro de Educación Continua de la FES Acatlán de la UNAM, le informó mediante correo electrónico el registro exitoso al diplomado; sin embargo, ahí no se advierte que haya tenido información respecto a su costo. Sino que fue hasta el diverso correo electrónico recibido el veinticinco de enero de dos mil veintitrés mediante el cual se informó al quejoso, entre otras cuestiones, el calendario de pagos y carta compromiso, es decir, que tuvo conocimiento pleno de los costos a cubrir hasta ese momento.

## AMPARO EN REVISIÓN 814/2023

27. Así, la demanda de amparo fue presentada dentro del plazo legal establecido para ello ya que se tuvo conocimiento completo del acto reclamado el veinticinco de enero de dos mil veintitrés y el escrito de demanda fue presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México el veintisiete de enero de la misma anualidad.
28. Por otra parte, las tres autoridades recurrentes hacen valer la improcedencia del juicio de amparo ya que consideran que no se trata de un acto de autoridad pues para que éste exista se requiere que se haya emitido un acto unilateralmente cuando fue el propio quejoso quien escogió de manera libre y sin coacción la manera de titularse de la licenciatura de derecho. Asimismo, el Rector de la UNAM manifiesta que el juicio de amparo es improcedente ya que no le corresponde a él garantizar el derecho a la gratuidad de la educación superior al ordenarse, mediante la sentencia del Juez de Distrito, que se cubran los pagos de los diplomados.
29. Dichas causas de improcedencia deben desestimarse al estar estrechamente vinculadas con la cuestión de fondo que a esta Segunda Sala le corresponde resolver. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 135/2001 de rubro: **“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE.”**<sup>5</sup>

### V. ESTUDIO DE FONDO

30. Como se mencionó, el problema jurídico que a esta Segunda Sala le corresponde resolver consiste en determinar si se transgrede el principio de gratuidad en la educación superior al exigirse el cobro de un diplomado como

---

<sup>5</sup> Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Enero de 2002, página 5

## AMPARO EN REVISIÓN 814/2023

opción de titulación de la licenciatura de Derecho en la FES Acatlán, de la UNAM. Para ello, el estudio se dividirá en dos apartados: **V.I** Marco jurídico sobre el derecho a la gratuidad en la educación superior y **V.II** Aplicación al caso concreto.

### **V.I Marco jurídico sobre el derecho a la gratuidad en la educación superior**

31. El derecho a la educación está previsto en el artículo 3° de la Constitución Federal:

Artículo 3o. Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado - Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias, la educación superior lo será en términos de la fracción X del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.

Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.

(...)

IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita;

(...)

X. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federal y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.

(...)

32. En el ámbito internacional, el derecho a la educación también está reconocido en diversos tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre<sup>6</sup>;

---

<sup>6</sup> Artículo XII. **Toda persona tiene derecho a la educación**, la que debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humanas.

## AMPARO EN REVISIÓN 814/2023

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales<sup>7</sup>; el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en

Asimismo tiene el derecho de que, mediante esa educación, se le capacite para lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad.

El derecho de educación comprende el de igualdad de oportunidades en todos los casos, de acuerdo con las dotes naturales, los méritos y el deseo de aprovechar los recursos que puedan proporcionar la comunidad y el Estado.

**Toda persona tiene derecho a recibir gratuitamente la educación primaria, por lo menos**

<sup>7</sup> “Artículo 13

**1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación.** Conviene en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Conviene, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.

**2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio de este derecho:**

**a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;**

b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados y, en particular, **por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;**

**c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;**

d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria;

e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente.

**3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.**

**4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.”**

## AMPARO EN REVISIÓN 814/2023

materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”<sup>8</sup>; y Convención sobre los Derechos del Niño<sup>9</sup>.

33. Todas esas disposiciones normativas coinciden en que: I) la titularidad del derecho a la educación es de toda persona; II) respecto de la educación

---

<sup>8</sup> “Artículo 13

Derecho a la educación

**1. Toda persona tiene derecho a la educación.**

2. Los Estados Partes en el presente Protocolo convienen que la educación deberá orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de la paz.

3. Los Estados Partes en el presente Protocolo reconocen que, con objeto de lograr el pleno ejercicio del derecho a la educación:

**a. La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente;**

**b. La enseñanza secundaria en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;**

**c. La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular, por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita;**

**d. Se deberá fomentar o intensificar, en la medida de lo posible, la educación básica para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción primaria;**

**e. Se deberán establecer programas de enseñanza diferenciada para los minusválidos a fin de proporcionar una especial instrucción y formación a personas con impedimentos físicos o deficiencias mentales.**

4. Conforme con la legislación interna de los Estados Partes, los padres tendrán derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, siempre que ella se adecue a los principios enunciados precedentemente.

5. Nada de lo dispuesto en este Protocolo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, de acuerdo con la legislación interna de los Estados Partes.”

<sup>9</sup> “Artículo 28

**1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular:**

**a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos;**

**b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la **implantación de la enseñanza gratuita** y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad;**

**c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados;**

**d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas;**

**e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar.**

2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar porque la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención.

3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.”

## AMPARO EN REVISIÓN 814/2023

básica, ésta debe estar orientada a posibilitar la autonomía de sus titulares y a habilitarles como miembros de una sociedad democrática; III) que la educación básica debe ser asequible a todos sin discriminación, de manera obligatoria, universal y gratuita, así como que el Estado debe garantizarla; IV) a que los padres tiene derecho a elegir la educación que se imparta a sus hijos y los particulares a impartirla, siempre y cuando respeten el contenido de este derecho.

34. En cuanto a las diferencias de la educación básica y la educación superior, esta Suprema Corte ha emitido diferentes criterios, destacando los siguientes.
35. La Primera Sala al emitir la jurisprudencia 1a./J. 79/2017 (10a.) de rubro **“DERECHO A LA EDUCACIÓN. SU CONFIGURACIÓN MÍNIMA ES LA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 3o. CONSTITUCIONAL.”**<sup>10</sup>, esencialmente determinó que existe una diferencia entre la educación básica y la educación superior. La primera de ellas se conforma de la educación preescolar, primaria y secundaria, las cuales comparten determinadas características, esto es, la educación debe ser gratuita, obligatoria, universal y laica. En cambio, la educación superior, no debe ser, en principio, necesariamente gratuita, aunque no está prohibido que lo sea, pues bien puede establecerse su gratuidad en virtud del principio de progresividad; y además, debe respetar otros principios como el de acceso sobre la base de las capacidades y la no discriminación en el acceso, permanencia y conclusión, entre otros.
36. Asimismo, en la jurisprudencia 1a./J. 83/2017 (10a.) de rubro **“DERECHO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR. SU CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS”**<sup>11</sup>, la Primera Sala destacó que el contenido del derecho a la educación superior no está centrado en la formación de la autonomía personal, sino en la materialización de un plan de vida libremente elegido y debido a ello es que se justifica, *prima facie*, que la educación superior no sea obligatoria,

---

<sup>10</sup> Visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 47, octubre de 2017, tomo I, página 181.

<sup>11</sup> Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 47, octubre 2017, tomo I, página 182.



## AMPARO EN REVISIÓN 814/2023

universal, ni, necesariamente gratuita, aunque el Estado Mexicano, en virtud del principio de progresividad y de diversos compromisos internacionales, asumió la obligación de extender, paulatinamente, la gratuidad a la educación pública superior. Sin embargo, ello no autoriza a establecer condiciones arbitrarias, pues la educación superior está sometida al principio de no discriminación y por ello está vedado en imponer condiciones de acceso, permanencia y conclusión discriminatorias, esto es, que establezcan diferencias de trato con base en propiedades irrelevantes para la consecución de los fines de la educación superior o sean inadecuadas, innecesarias, o desproporcionadas.

37. Por su parte, el Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 168/2020 y su acumulada 177/2020 desestimó la propuesta consistente en que el deber estatal de impartir educación superior es de cumplimiento inmediato para el Estado, ya que la intención del constituyente permanente era consonante con el artículo 3° de la Constitución Federal y con el décimo quinto de su régimen transitorio, en cuanto a que es obligación del Estado garantizar la gratuidad de la educación superior, desde el momento de la entrada en vigor de la reforma de dos mil diecinueve, así como tomar las medidas presupuestarias y financieras para asegurar la sustentabilidad de la gratuidad de este tipo de educación.
38. De lo anterior, sería válido considerar que en cuanto a la gratuidad de la educación superior, el criterio de este Alto Tribunal, ha sido en el sentido de que ésta, a diferencia de la inicial que se garantiza de inmediato, debe ser gradual.
39. Posteriormente, la Primera Sala al resolver el amparo en revisión 197/2022<sup>12</sup> determinó, en lo que interesa al presente asunto, que la gratuidad de la educación en cuanto a la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior que presta directamente el Estado a través de sus instituciones públicas, da cuenta de que dichos servicios no se constituyen sobre la base

---

<sup>12</sup> En sesión de seis de julio de dos mil veintidós por unanimidad de votos.

## AMPARO EN REVISIÓN 814/2023

de un intercambio económico en un contexto de mercado, con base en una contraprestación o pago que pueda condicionar el servicio; incluso, la Ley General de Educación, es enfática en que, si en estos servicios a cargo del Estado se llegara a otorgar alguna donación o aportación voluntaria, de ningún modo será considerada una contraprestación por el servicio.

40. En este sentido, destacó que la relación jurídica que se crea entre el Estado a través de sus instituciones públicas educativas y los particulares que reciben educación en éstas, bajo la regla de gratuidad absoluta, no es una relación de contenido económico comercial de tipo de las de coordinación en las que el Estado puede participar bajo el derecho privado, ni es dable atribuirle el carácter de una relación de consumo, aunque se trate de la prestación de un servicio público.
41. Asimismo, se reconoció que pudieran existir instituciones públicas de educación superior en cuyos servicios educativos medien contraprestaciones económicas, esto, sobre la base de que ni la Constitución Federal ni la Ley General de Educación establecen propiamente la gratuidad de la educación en ese nivel.
42. Por su parte, la Segunda Sala al resolver el amparo en revisión 396/2020<sup>13</sup> precisó que el derecho a la educación superior no constituye un derecho irrestricto sino que se encuentra condicionado a los requisitos de acceso, permanencia y conclusión que establezca la normativa de las instituciones públicas y privadas que la impartan y sobre las cuales los estudiantes están informados cuando ingresan.
43. También se determinó que, en cuanto a los requisitos de permanencia y conclusión, las universidades tienen la posibilidad de reglamentar mecanismos alternativos para que sus alumnos cumplan en tiempo y forma el plan de estudios y obtengan el grado al cual aspiran, como, por ejemplo la aplicación de exámenes extraordinarios, la posibilidad de recurrar alguna

---

<sup>13</sup> En sesión de veintiuno de abril de dos mil veintiuno por unanimidad de votos.

## **AMPARO EN REVISIÓN 814/2023**

materia o el otorgamiento de alguna prórroga para concluir los estudios de manera integral.

44. En síntesis, esta Suprema Corte ha diferenciado entre la obligación inmediata de asegurar el derecho a la educación, en específico, el acceso gratuito, universal y obligatorio a la educación básica y media superior; y otras de cumplimiento progresivo, consistentes en lograr el ejercicio pleno del derecho hasta el máximo de los recursos disponibles, lo que implica entre otras cosas, extender la gratuidad a la educación superior.
45. Lo anterior es congruente con lo establecido en el artículo 48 de la Ley General de Educación que preve que en el ámbito de sus competencias, las autoridades educativas federal, de las entidades federativas y de los municipios concurrirán para garantizar la gratuidad de la educación superior de manera gradual, comenzando con el nivel de licenciatura y, progresivamente, con los demás niveles de la educación superior, en los términos que establezca la ley de la materia, priorizando la inclusión de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas y los grupos sociales más desfavorecidos para proporcionar la prestación de este servicio educativo en todo el territorio nacional. Destacando que en todo momento se respetará el carácter de las instituciones a las que la ley otorga autonomía.
46. Ello también coincide con el artículo 49 de la citada ley en el que se prevé que las autoridades educativas respetarán el régimen jurídico de las universidades a las que la ley les otorga autonomía, en términos de lo establecido en la fracción VII, del artículo 3° de la Constitución Federal, lo que implica, entre otros, reconocer su facultad para ejercer la libertad de cátedra e investigación, crear su propio marco normativo, la libertad para elegir sus autoridades, gobernarse a sí mismas y administrar su patrimonio y recursos.
47. Por su parte, la Ley General de Educación Superior en su artículo 6, fracción VIII, dispone que la gratuidad se refiere a las acciones que promueva el Estado para eliminar progresivamente los cobros de las instituciones públicas de educación superior a estudiantes por conceptos de inscripción,

## AMPARO EN REVISIÓN 814/2023

reinscripción y cuotas escolares ordinarias, en los programas educativos de técnico superior universitario, licenciatura y posgrado, así como para fortalecer la situación financiera de las mismas, ante la disminución de ingresos que se observe derivado de la implementación de la gratuidad.

48. En suma, tanto en los criterios que ha emitido esta Suprema Corte como en las propias disposiciones normativas, se concluye que la gratuidad en la educación superior no se garantiza de inmediato, como sucede con la educación inicial, sino que la gratuidad se puede dar de manera progresiva, conforme al artículo 1° constitucional.

### V.II Aplicación al caso concreto

49. Una vez precisado que el principio de gratuidad en la educación superior no es de cumplimiento inmediato, sino progresivo, corresponde analizar si el cobro de un diplomado como opción de titulación de la educación superior es contrario al artículo 3° de la Constitución Federal.
50. **Esta Segunda Sala considera que son esencialmente fundados los agravios hechos valer por las autoridades responsables y suficientes para revocar la sentencia recurrida,** conforme a lo siguiente.
51. Como se ha mencionado, el citado artículo 3° de la Constitución Federal distingue entre educación inicial (preescolar, primaria y secundaria), educación media superior y educación superior (educación universitaria).
52. Al respecto, la ley General de Educación en su artículo 47, dispone que la educación superior, como parte del sistema educativo nacional y último esquema de la prestación de los servicios educativos para la cobertura universal prevista en el artículo 3° de la Constitución Federal, es el servicio que se imparte en sus distintos niveles, después del medio superior y está compuesta por la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de la licenciatura,

## AMPARO EN REVISIÓN 814/2023

comprendiendo también la educación normal en todos sus niveles y especialidades.

53. Asimismo, prevé que las autoridades educativas, en el ámbito de sus competencias establecerán políticas para fomentar la inclusión, continuidad y egreso oportuno de estudiantes inscritos en educación superior, poniendo énfasis en los jóvenes, y determinarán medidas que amplíen el ingreso y permanencia a toda aquella persona que, en los términos que señale la ley de la materia, decida cursar este tipo de estudios, tales como el establecimiento de mecanismos de apoyo académico y económico que responda a las necesidades de la población estudiantil. Las instituciones podrán incluir, además, opciones de formación continua y actualización para responder las necesidades de la transformación del conocimiento y cambio tecnológico.
54. En el mismo sentido, el artículo 3 de la Ley General de la Educación Superior prevé que la educación superior se imparte después del nivel medio superior y está compuesto por los niveles de técnico superior universitario profesional asociado u otros equivalentes, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. Incluyendo también la educación universitaria, tecnológica, normal y de formación docente.
55. De lo anterior se desprende que la educación superior se conforma por la licenciatura, especialidad, maestría y la educación de formación docente. Asimismo, la Ley General de Educación prevé la posibilidad de que las instituciones de educación superior otorguen opciones de formación continua y actualización para responder las necesidades de la transformación del conocimiento y cambio tecnológico.
56. En lo referente a la UNAM, el artículo 68 del Reglamento General de Estudios Universitarios dispone que el título de licenciatura o el título profesional se otorgará cuando se hayan acreditado todas las asignaturas o módulos del plan de estudios respectivo y cumplido satisfactoriamente con alguna de las

## AMPARO EN REVISIÓN 814/2023

opciones de titulación aprobadas por el consejo técnico o por el comité académico que corresponda.

57. El inciso d), del artículo 63 del citado Reglamento indica que, para los casos de licenciatura y posgrado, los consejos técnicos o los comités académicos tienen la facultad de determinar las modalidades de titulación y graduación que adoptarán, procurando incluir el mayor número de opciones para ello.
58. Ahora bien, el Reglamento General de Exámenes de la UNAM, en su artículo 19 establece que, en el nivel de licenciatura, el título se expedirá, a petición del interesado, cuando haya acreditado en su totalidad el plan de estudios respectivo, realizado el servicio social y cumplido con alguna de las opciones de titulación previstas en el diverso artículo 20, las cuales son:

### Apartado A:

- a) Titulación mediante tesis o tesina y examen profesional.
- b) Titulación por actividad de investigación
- c) Titulación por seminario de tesis por tesina.
- d) Titulación mediante examen general de conocimientos.
- e) Titulación por totalidad de créditos y alto nivel académico
- f) Titulación por actividad de apoyo a la docencia
- g) Titulación por trabajo profesional.
- h) Titulación mediante estudios en posgrado
- i) Titulación por ampliación y profundización de conocimientos.
- j) Titulación por servicio social

### Apartado B

En el caso de las carreras cuyos egresados puedan producir o presentar obra artística, cada consejo técnico determinará la normatividad a que se sujetarán los alumnos que opten por esta modalidad.

En las carreras de Medicina, Optometría, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Enfermería y Odontología, se deberá presentar un reporte técnico del servicio social como requisito adicional para

## AMPARO EN REVISIÓN 814/2023

la titulación; el consejo técnico, podrá determinar si el servicio social en áreas rurales, previa presentación del reporte técnico y examen oral ante un comité integrado conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de este reglamento, se pueda validar como único requisito de titulación.

Cuando la naturaleza de la carrera lo amerite, el estudiante deberá, además, aprobar un examen práctico.

59. De lo anterior se desprende que, en la UNAM se prevén diversas formas de titulación en las que el alumno o egresado de la licenciatura puede obtener su título, escogiendo para ello voluntariamente la opción que mas le convenga a sus intereses. Es decir, que **la UNAM no impone alguna manera de titulación en específico para obtener los grados académicos, sino que cada persona en igualdad de condiciones y oportunidades, tiene la facultad de elegirla.**
60. En cuanto a la opción electa por el quejoso, consistente en titularse de la licenciatura de derecho por ampliación y profundización de conocimientos mediante el curso de un diplomado, el propio artículo 20, inciso i) del Reglamento General de Exámenes de la UNAM prevé que para esta opción el alumno deberá haber concluido la totalidad de los créditos de su licenciatura, así como que cada consejo técnico o comité académico determinará las características que deberán cubrirse para estar en posibilidad de elegir una de las siguientes opciones de esa modalidad:
  - a) Haber concluido los créditos de licenciatura con un promedio mínimo de ocho punto cinco y aprobar un número adicional de asignaturas de la misma licenciatura o de otra afín impartida por la UNAM, equivalente a cuando menos el diez por ciento de créditos totales de su licenciatura, con un promedio mínimo de nueve. Puntualizando que dichas asignaturas se considerarán como un semestre adicional, durante el cual el alumno obtendrá conocimientos y capacidades complementarias a su formación.

## AMPARO EN REVISIÓN 814/2023

- b) Aprobar cursos o diplomados de educación continua impartidos por la UNAM, con una duración mínima de 240 horas, especificados como opciones de titulación en su licenciatura.

61. Lo anterior es coincidente con el segundo párrafo del artículo 6 del Reglamento General de Educación Continua de la UNAM que dispone que los diplomados de educación continua podrán ser considerados por los consejos técnicos como opción de titulación por la modalidad de ampliación y profundización de conocimientos, pudiendo obtener un diploma o constancia respectiva, conforme al diverso artículo 7 del mismo reglamento.
62. En cuanto a la licenciatura de Derecho de la FES Acatlán, en 2005 el Consejo Técnico de dicha facultad aprobó el Acuerdo mediante el cual se adoptaron como opciones de titulación la “Titulación por ampliación y profundización de conocimiento”. Asimismo, conforme a los cuadernos básicos de administración escolar, edición actualizada a dos mil diecinueve emitidos por la Dirección General de Administración Escolar denominado Opciones de Titulación en la UNAM. Facultades, Escuelas, Centros e Institutos, destaca que, para la opción de titulación elegida libremente por el quejoso, consistente en la ampliación y profundización de conocimientos, se requiere cubrir la totalidad de asignaturas y el cien por ciento de los créditos, así como cumplir con los requisitos para la titulación establecidos en el plan de estudios, entre otras cuestiones.
63. Bajo ese contexto, se desprende que existen diversas formas de titulación de una licenciatura de la UNAM; sin embargo, en cuanto a la titulación por ampliación y profundización de conocimientos, si para optar por ella se requiere haber concluido la totalidad de créditos de la licenciatura, es válido concluir que no es parte de ésta. Es decir, que **los diplomados como opción de titulación no se encuentran comprendidos dentro de los planes y programas de estudios de la licenciatura y por esto, no forman parte de ella**, sino que se pueden cursar, como opción de titulación a través de la educación continua que brinda la UNAM, siempre que se culmine con los



## AMPARO EN REVISIÓN 814/2023

estudios superiores correspondientes a la licenciatura, además de cubrir otros requisitos.

64. Al respecto, el artículo 2 del Reglamento General de Educación Continua de la UNAM prevé que podrán considerarse actividades de educación continua de la UNAM los eventos académicos tales como congresos, conferencias, cursos, diplomados, seminarios y talleres, más aquellos que el Comité de Educación Continua de la entidad académica o dependencia universitaria asuma como tales, impartidos fuera del marco curriculares de los planes y programas formales, susceptibles o no de adquirir valor en créditos y reconocimiento formal como complemento de la formación académica o profesional.
65. **Así, contrario a lo argumentado por el quejoso en la demanda de amparo, el diplomado que él eligió como forma de titulación, entre las diversas expuestas anteriormente, no forma parte de la educación superior a nivel licenciatura sino que se trata de educación continua, la cual se imparte con el objetivo de responder las necesidades de la transformación del conocimiento y cambio tecnológico.**
66. En este sentido, **si bien conforme al artículo 47 de la Ley General de Educación existe la posibilidad de que las instituciones de educación superior impartan educación continua -como puede serlo mediante un diplomado- el principio de gratuidad en la educación superior, aunque sea de manera progresiva, no les aplica, ya que este tipo de educación no está comprendida dentro de los grados de licenciatura, especialidad, maestría o doctorado establecidos tanto en la Ley General de Educación como en la Ley General de Estudios Superiores.**
67. A mayor abundamiento, conviene precisar que, en la UNAM, conforme a su Reglamento de Pagos, se cubre una cuota de manera voluntaria para cursar la licenciatura, mientras que en los cursos de educación continua se cubre una cuota de acuerdo a si el que la cursa sea parte de la comunidad

## AMPARO EN REVISIÓN 814/2023

universitaria o público en general debido a que se les paga a los especialistas que imparten esos cursos extracurriculares.

68. Por otra parte, el hecho de que la UNAM cobre por el curso del diplomado como opción de titulación, no genera discriminación alguna en cuanto a la condición socioeconómica del quejoso. Esto porque conforme al artículo 20 del Reglamento General de Exámenes existen diversas formas en las que el alumno o egresado puede optar para para obtener el título del grado académico que pretende, las cuales en su gran mayoría son gratuitas, quedando al libre arbitrio de cada persona, en igualdad de condiciones, elegir la que más le convenga.
69. De ahí que el hecho de que alguna de esas opciones de titulación implique una erogación no se traduce en discriminación alguna pues existen otras formas de titulación que el quejoso puede libremente elegir conforme a su intereses y proyecto de vida, cumpliendo los requisitos para ello.
70. Incluso en los recursos de revisión rendidos por las autoridades de la FES Acatlán de la UNAM<sup>14</sup>, se advierte que éstas señalan que son gratuitas las opciones de titulación consistentes en: 1) Titulación mediante tesis o tesina y examen profesional; 2) titulación por actividad de investigación; 3) titulación por seminario de tesis o tesina; 4) titulación mediante examen general de conocimientos; 5) titulación por totalidad de créditos y alto nivel académico; 6) titulación por actividad de apoyo a la docencia; 7) titulación por trabajo profesional; 8) titulación mediante estudios en posgrado (especialidad, maestría o doctorado); 9) titulación por servicio social y las demás que cada consejo técnico o comité académico determine según las necesidades de cada cerrera, con previa opinión favorable del consejo académico de área correspondiente.
71. Así, se reitera, **la UNAM otorga diferentes opciones por las que una persona puede obtener el título para el grado académico cursado, las cuales, si bien hacen distinciones respecto a los requisitos para acceder**

---

<sup>14</sup> Fojas 21 23 a de los recursos de revisión correspondientes.

## AMPARO EN REVISIÓN 814/2023

a ellas, lo cierto es que no son discriminatorias ya que cada persona elige voluntariamente, en igualdad de condiciones, la que mejor le convenga.

72. Por otra parte, es importante precisar que la Facultad de Derecho de la UNAM cuenta con diversas becas específicas para la titulación, como lo son: becas de titulación para egresados extemporáneos, becas de titulación para proyectos de investigación para la UNAM; becas para titulación de egresados de alto rendimiento; becas de titulación para especialidad, entre otras<sup>15</sup>.
73. Además, si el quejoso o cualquier persona que desee acceder a la opción de titulación consistente en cursar un diplomado o que quisiera complementar sus conocimientos mediante los cursos, talleres, diplomados, seminarios, entre otros, de educación continua y no tenga las capacidades económicas para solventarlo, pueda solicitar una beca en términos del artículo 18 del Reglamento General de Educación Continua.

### VI. DECISIÓN

74. Conforme a lo expuesto, al haberse desechado por extemporánea la revisión adhesiva, y al haber resultado fundados los agravios que hicieron valer las autoridades recurrentes, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que lo procedente es revocar la sentencia recurrida y negar el amparo protección de la justicia federal a la parte quejosa.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:

**PRIMERO.** Se desecha el recurso de revisión adhesivo.

**SEGUNDO.** Se revoca la sentencia recurrida.

**TERCERO.** La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso.

---

<sup>15</sup> Al respecto se sugiere consultar: [Becas \(unam.mx\)](https://www.unam.mx/estudios/estudios-de-graduatados/estudios-de-graduatados)

## AMPARO EN REVISIÓN 814/2023

**Notifíquese** con testimonio de esta ejecutoria. En su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por \*\*\*\*\* de \*\*\*\* votos de las Ministras \*\*\*\*\* y \*\*\*\*\*, así como de los Ministros \*\*\*\*\* (quien se reserva el derecho a formular voto aclaratorio/concurrente/particular), \*\*\*\*\* (Ponente) y Presidenta[e] \*\*\*\*\* (quien se reserva el derecho a formular aclaratorio/concurrente/particular).